

Auto: AI-025
Proceso: Restitución de Inmueble Arrendado
Demandante: Edwin Humberto Londoño Guzmán
Demandado: Omar Adolfo Colorado
Radicado: 05001 22 03 000 2023 00716 00.
Mag. Ponente: Julián Valencia Castaño
Asunto: No acepta impedimento.
Tema: Evocación de la causal 2 del art. 141 del C.G.P.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA CIVIL DE DECISIÓN**

Medellín, tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Sala a resolver el impedimento formulado por la Juez titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barbosa (Ant), frente a la cognición en primer grado del proceso verbal de restitución de bien inmueble arrendado instaurado por el señor Edwin Humberto Londoño Guzmán en contra de Omar Adolfo Colorado.

I. ANTECEDENTES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del C.G.P. y, con evocación de la causal contenida en el numeral 2° de la precitada norma, la Juez del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Barbosa Ant., a quien por impedimento de su homóloga la Juez primera, le correspondió conocer de la demanda objeto de estudio, y a su vez estimó que concurría en ella la causal descrita, lo que, en consecuencia, le impedía conocer de la demanda que viene de referenciarse, aduciendo que *“la suscrita había conocido del asunto en la acción de tutela 2021-00247, y aunque no resolvió de fondo, porque en este caso consideró que era improcedente, porque había un asunto pendiente por resolver que no se había resuelto” sin embargo esa causal habla de haber conocido del proceso o haber realizado cualquier actuación, y si bien en este proceso es en vía ordinaria y el conocimiento se dio en sede de tutela*, para posteriormente precisar que *“el accionante es hoy el demandado “Edwin Humberto arrendó un inmueble al señor Omar Adolfo”, situación por la que concluyó “Que si bien en la tutela se cuestionó aspectos relacionados con la alcaldía, lo cierto es que tiene que ver con el inmueble objeto de restitución”*.

En línea con lo anterior, el Juzgado Civil Municipal de Girardota, a quien en turno le correspondió el conocimiento del presente asunto, una vez realizado el estudio preliminar del mismo y, por auto del veintitrés (23) de noviembre, declaró infundado el impedimento esgrimido, tras argumentar que: *“el impedimento señalado por la Juez Segunda Promiscua Municipal de Barbosa no se configura en el caso de marras, pues, la Acción de Tutela de la cual tuvo conocimiento bajo el radicado 2021-00247, lo fue una acción autónoma e independiente a esta Litis; a más de eso, el asunto debatido en la acción constitucional lo fue el debido proceso administrativo adelantado por la Alcaldía Municipal y, no, las causales que por restitución de inmueble pueden predicarse en el asunto que hoy nos convoca.*

Para resolver el impedimento formulado, la Sala estima pertinente realizar las siguientes,

II. CONSIDERACIONES.

El legislador, consciente de que el actuar de los Jueces puede estar impregnado de sucesos que llegan a comprometer su imparcialidad como funcionarios judiciales, instituyó una serie de causales, susceptibles de ser invocadas por los jueces de causa, para sustraerse del conocimiento del asunto sometido a su juicio. Causales que garantizan lo que en voces del tratadista Ramiro Podetti se denomina “la idoneidad subjetiva del Órgano Jurisdiccional”.

Se tiene entonces que la juez Segunda Promiscua Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barbosa (Ant), invocó para el impedimento avistado la causal contenida en el numeral 2° del artículo 141 del C. G. P., la cual reza de manera literal:

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes: (...)2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.”

Según la doctrina nacional¹, debe ser entendida de la siguiente manera:

“Esta causal apunta a evitar que un juez conozca un mismo asunto en diferentes instancias, pues se parte de la base de que si ello llega a suceder, perderá por completo objetividad en su labor, en la medida en que se trataría de una misma persona revisando sus propias actuaciones pero en un grado o instancia diferente del mismo proceso..” (...) Debe precisarse que la causal en comento no solo se configura cuando el juez adopta una decisión que le haya permitido “conocer del proceso” en una instancia anterior, sino también – en general – cuando ha adelantado “cualquier actuación”, lo cual implica que esta causal se estructura por el simple hecho de que el juez haya figurado como tal en el mismo proceso en una instancia anterior y haya adelantado cualquier tipo de actuación, bien sea adoptando una decisión de fondo o apenas de simple trámite, pues en ambos casos se considera que se ha conocido el proceso en esa instancia anterior y, por ende, la serenidad, imparcialidad y objetividad del juzgador se pierden en tanto, como se dijo, terminaría revisando sus propias actuaciones. Aquí es importante precisar que el anterior estatuto procesal, esto es, el Código de Procedimiento Civil, consagraba en el numeral 2 del artículo 50 esta misma causal, pero en ella la hipótesis tan solo se limitaba a “[h]aber conocido del proceso en instancia anterior”. Esto generó discusiones en torno al entendimiento de lo que significa “conocer el proceso”, pues se decía que ello solo ocurría cuando el juez en instancia anterior adoptaba una decisión de fondo y no mero trámite, razón por la cual, para ponerle fin a esa discusión el nuevo estatuto le agregó la frase “realizado cualquier actuación”, con lo que queda claro que la causal opera hoy no solo cuando en instancia anterior se adopta una decisión de fondo, sino en general cuando se adelanta cualquier tipo de actuación, incluso de carácter formal o accidental”.

La finalidad del régimen de los impedimentos y recusaciones no es otro que la satisfacción de la garantía fundamental de un juez natural, independiente e imparcial que garantice a los ciudadanos una recta y cumplida administración de justicia, por lo tanto, la manifestación del impedimento no está sujeta al particular arbitrio de quien la declara, pues se encuentra vinculada inevitablemente a la taxatividad de las causales, sin que sea posible acudir a la analogía, en aras de acreditar su procedencia:

“En desarrollo del principio de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales, la legislación procesal ha previsto una serie de causales de orden objetivo y subjetivo en las cuales el juez debe declararse impedido para decidir, garantizando a las partes, terceros y demás intervinientes las formas propias de cada juicio.

Empero, como a los jueces no les está permitido separarse por su propia voluntad de las funciones que les han sido asignadas, y a las partes no les está dado escoger libremente la persona del juzgador, las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en cuanto se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son estas y no otras, las circunstancias fácticas que impiden que un funcionario judicial siga conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión, compromete la independencia de la administración de

¹ SANABRIA SANTOS, Henry. Derecho Procesal Civil. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2021, pp. 227 y ss.

justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial.²

2. Caso en concreto. En razón de lo expuesto, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si la Dra. Piedad Chica García Titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barbosa (Ant), debe marginarse de conocer en primera instancia de la demanda de restitución de bien inmueble arrendado instaurada por el señor Edwin Humberto Londoño Guzmán en contra de Omar Adolfo Colorado.

Ello, comoquiera que en sede constitucional asumió de antes el conocimiento de una acción de tutela que promovió el señor Omar Adolfo (hoy demandado) en contra del hoy demandante (Edwin Humberto) y otros (Municipio de Barbosa, Secretaria de Planeación e Inspección de Policía), en el que se cuestionó la Resolución Nro. 0005233 del 07 de julio de 2021, por medio del cual declara en estado de ruina el inmueble (objeto de restitución). Decisión que, conforme a la causal alegada, no logra consolidarse, porque el precepto del impedimento no debe asumirse en el sentido literal “haber conocido del proceso” sino que es preciso conectarla con el otro requisito de la norma, esto es “instancia anterior” y en este caso, la Juez, no actuó como superior funcional, como para acreditar el supuesto “de revisarse sus propias actuaciones” ni tampoco puede interpretarse únicamente bajo la connotación de conocimiento previo, máxime cuando, en sede constitucional, en ningún momento se cuestionaron aspectos relacionados con el trámite del proceso y por contera de las actuaciones judiciales, para que al menos pudiera sembrarse un hálito de duda de su posible configuración en el escenario material, y en el caso sub examine, el conocimiento de la acción constitucional obedeció aspectos totalmente diversos a los que hoy se cuestionan, mismos frente a los cuales incluso la misma juez que se declaró impedida así lo dejó entrever, cuando nada menos indicó que en la acción de tutela sólo se estaban cuestionando asuntos de naturaleza administrativa y que no jurisdiccionales.

² Fragmento extraído del auto AP420-2020 del 12 de febrero del 2020. CSJ SP, 19 Oct. 2006, rad. 26246 y CSJ. AP, 2472 del 2014.

Cabe aquí memorar lo que para la Corte Constitucional tipifica realmente el impedimento por “haber emitido consejo u opinión sobre el asunto materia del proceso”, mismo que mutatis mutandis es el que ahora pretende utilizar la juez con base en la causal de impedimento en materia civil, por lo que frente a ese tópico ha dicho el alto Corporado en la T-800/2006 de la cual se extracta:

“Ahora bien, ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se dé el supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia que el mismo juez haya proferido. Además, también resulta pertinente resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la tesis de una causal de impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, tanto como afirmar que en la Corte Constitucional los magistrados no pudieran tomar decisiones en sede de tutela si una norma, relevante en el caso que se estudia, se encuentra demandada en sede de constitucionalidad.

En este sentido debe recordarse que el debate propio de la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las cuales la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de fondo que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no incurre en su abuso– es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando obra como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, en principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio)

De lo que se concluye –y desea reiterarlo la Sala– que entre dos procesos, uno tramitado por procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo no constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, de no hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el artículo 39 del decreto 2591 de 1991.”

Como puede verse, no es cierto que por el mero hecho de que la juez haya conocido de antes una tutela entre las mismas partes y por hechos muy distintos a los actuales, pueda estimarse que quedó impedida para conocer ahora del contrato de arrendamiento y es por esa potísima razón que en este sentido, teniendo en cuenta el grado de intervención y el contacto del funcionario judicial con los medios de prueba, no logra establecerse la tipicidad de la causal alegada, porque no sólo que la participación se dio de manera tangencial, sino que además no emitió ningún pronunciamiento de fondo sobre el tema central objeto de debate en la acción de restitución de inmueble arrendado, a lo que se suma que allí actuó como juez constitucional y que no como juez ordinario, pues cosa distinta es que haya proferido sentencia como juez ordinaria y que ahora en

sede de tutele le estuviera tocando decidir mediante tutela si cometió una vía de hecho en aquella decisión, pero nada de eso sucedió y simplemente ha de concluirse que la causal de impedimento esgrimida por ella nunca tuvo lugar y por inexistente se debe rechazar.

Así las cosas esta sala de Decisión considera que los argumentos que sustentaron la decisión de tutela, además de haber sido emitidas en ejercicio de la función de juez constitucional, no constituyen razones suficientes para ser considerados como preconceptos u opiniones anticipadas relevantes frente a las pretensiones planteadas en la demanda de restitución de inmueble arrendado, pues como se acotó previamente y así como lo afirmó el juez que denegó el impedimento, no existió un pronunciamiento de fondo sobre el tema objeto de controversia, ya que el amparo fue declarado improcedente debido a que Omar Adolfo Colorado Garcés se anticipó a formular la acción de tutela, pues para la fecha en que se interpuso, la Alcaldía del Municipio de Barbosa apenas si estaba conociendo de la solicitud de revocatoria directa que aquel formuló, razón suficiente para acreditar el franco desconocimiento del principio de subsidiariedad.

Conforme a lo expuesto, razón le asistió al Juzgado Civil Municipal de Girardota, al declarar infundado el impedimento, y, en consecuencia, una vez en firme la presente decisión, se remitirá nuevamente el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Barbosa para lo de su competencia.

De esta manera, y por las razones expuestas, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

III. RESUELVE

PRIMERO: No Aceptar el impedimento formulado por la Juez Piedad Chica Garcia como titular del Juzgado Segundo Promiscua Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barbosa (Ant) para

asumir el conocimiento de la acción verbal –
restitución de inmueble arrendado- con radicado
05079 40 89 002 2023 00292 00.

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, se ORDENA devolver el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barbosa para que continúe con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado

Firmado Por:
Julian Valencia Castaño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e5c6168a838d8ce148d7ffb66c29bb28b5229b2c5b167e46e0d207554531f40f**

Documento generado en 03/04/2024 10:15:15 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>